

Ecocidio en el Golfo

Luis Hernández Navarro

La jornada

11 de enero de 2005

Mal terminó 2004 en el río Coatzacoalcos. El 22 de diciembre pasado reventó un oleoducto en su cauce, cerca del poblado de Nanchital, y se derramaron 5 mil barriles de petróleo. Una enorme mancha contaminante se expandió hasta su desembocadura en el Golfo de México. Al menos 60 mil personas resultaron afectadas.

Mal comenzó el año en esa región veracruzana. El director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Luis Ramírez Corzo, ofreció una disculpa por los daños ocasionados por la empresa, pero, en lugar de emprender iniciativas de fondo para repararlos, puso en marcha acciones de maquillaje sin más fin que ocultarlos.

Después de decir que se habían "afectado vidas que tardan siglos en regenerarse", el mandatario veracruzano Fidel Herrera Beltrán desistió de interponer una denuncia penal contra la petrolera paraestatal por el perjuicio ecológico provocado. No quiso, afirmó, "abrir un frente de confrontación con el gobierno federal". Y rechazó que su postura obedezca a la intención de negociar la sede del Proyecto Fénix para que se ubique en el corredor industrial Minatitlán-Coatzacoalcos en lugar de Altamira, en Tamaulipas.

En vez de cumplir con sus funciones de vigilancia, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), dirigida por el aprendiz de porro José Luis Luege, se ha dedicado a encubrir a la paraestatal y a minimizar la tragedia. "Sólo murieron dos víboras de agua y una gaviota", declaró uno de sus subordinados, Adrián Vázquez (*La Jornada*, 6 de enero de 2004).

Y el secretario del Medio Ambiente, Alberto Cárdenas, conocido como *El Dos Neuronas* por su deslumbrante inteligencia, fiel a su política de defensa de las ganancias empresariales por sobre la conservación de la naturaleza, ¡felicitó! a Pemex y calificó su actitud de "preocupada por el medio ambiente". Siguió así la ruta que ha caminado hasta ahora -por ejemplo en la destrucción de los manglares quintanarroenses denunciadas por *La Jornada*- para evadir defender la naturaleza y la salud de los mexicanos.

Lástima que las estadísticas de la misma Profepa muestren una realidad distinta. Pemex es el responsable de 57 por ciento de las emergencias ambientales a nivel nacional con sustancias peligrosas, con mil 470 desastres ambientales de 1997 a 2001. El estado de Veracruz ocupa un lamentable primer lugar en el número de "incidentes": 502, seguido por Campeche con 419 y

Tabasco con 391. En promedio, 70 por ciento de los desastres provocados por la petrolera ocasionan daños al suelo, 30 por ciento al agua y 10 por ciento al aire.

Según Oilwatch, el principal agente de contaminación petrolera de los litorales del Golfo de México es la transportación de combustible (hay 192 rutas petroleras en la cuenca del Gran Caribe). El segundo lugar lo ocupa la extracción del oro negro. En tercer término se encuentran los subproductos y desechos de los procesos de transformación petrolera. Finalmente la cuarta y quinta la constituyen los accidentes de buques y fugas de ductos de transportación, respectivamente.

Greenpeace denunció que de las ocho empresas que contrató Pemex para la limpieza del derrame en el río Coatzacoalcos, sólo dos cuentan con Registro Federal de Empresas Autorizadas para la Restauración de Suelos Contaminados, de la Semarnat. Son las compañías Saint Martin y Urbis. Esta última tiene un largo historial de fraude, incumplimientos de contrato y manejo ambiental desastroso.

Además, según el organismo conservacionista, estas ocho compañías han contratado a menores de edad y gente de la tercera edad. Y los trabajadores deben realizar sus actividades sin máscaras, sin overoles impermeables, muchos de ellos descalzos y sin guantes. Laboran jornadas de 12 horas y, en varios casos, no se les ha pagado o han recibido un salario menor a lo acordado.

Detrás de la tragedia ambiental se encuentra la decisión de los sucesivos gobiernos federales desde Miguel de la Madrid -agravada por el actual- de dismantelar Pemex para justificar su privatización y su ordeña presupuestal. Se trata de una política que, de acuerdo con una investigación del Instituto Mexicano del Petróleo, ha provocado que más de la mitad de los 56 mil kilómetros de oleoductos que opera la empresa ya no sirvan, se encuentren obsoletos (tienen más de 30 años de funcionamiento), principalmente por los niveles de corrosión del acero que presentan.

El investigador Leonardo Meza ha documentado cómo Pemex enfrenta los conflictos sociales y ambientales que genera su operación de manera patrimonialista. Indemniza con pagos individuales a los afectados, pero no considera los daños al medio ambiente, que no son cuantificables en reclamos individuales. Los mecanismos de pago individual por daños demostrables en el patrimonio de las personas generan pulverización social y dejan intacto el costo ambiental de los recursos que son sustento de las actividades productivas de las comunidades contaminadas: lagunas, suelos, vegetación, recursos hídricos, etcétera.

En el Golfo de México coinciden los más importantes recursos oceánicos y costeros, así como la mayor riqueza productiva de gas e hidrocarburos. Aquí se concentran 62 por ciento de sus ríos, estuarios, lagunas costeras y pantanos. Simultáneamente se genera 90 por ciento del gas natural

y más de 80 por ciento de los hidrocarburos se originan en las ricas plataformas continentales de la zona.

En la región, la lógica de funcionamiento de la industria petrolera y la conservación de los ecosistemas no necesariamente coinciden y, con frecuencia, se afectan los segundos por privilegiar la primera. Las nefastas políticas de Vicente Fox en el sector, su obsesión por privatizarlo a como dé lugar y su negligencia han agravado estas contradicciones precipitando el riesgo de una catástrofe ambiental.

El ecocidio en el Golfo de México nos demuestra que a la actual administración la conservación del medio ambiente le tiene sin cuidado.

Twitter: [@lhan55](#)

Fuente: <https://www.jornada.com.mx/2005/01/11/019a1pol.php>